TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020).

Ref: Exp. 25183-31-03-001-2015-00405-01.

Pasa a decidirse el recurso de apelación interpuesto por los demandados contra el auto de 27 de noviembre del año anterior proferido por el juzgado civil del circuito de Chocontá, mediante el cual denegó la solicitud de nulidad formulada por éstos dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Bancolombia S.A. contra Julia Marlen Barrantes Cobos y José Neyid Chicuazuque Umbarila, teniendo en cuenta los siguientes,

I- Antecedentes

La demanda solicitó librar mandamiento de pago contra los demandados, en su condición de actuales propietarios del bien, por el equivalente en pesos de 39.444,30019 Uvr correspondiente a las cuotas en mora de los meses de febrero a septiembre de 2015, con los intereses de plazo desde que se hicieron exigibles y 929244,0299 Uvr como capital acelerado, más los intereses moratorios desde la presentación de la demanda hasta cuando se efectúe el pago, a la tasa máxima permitida por la ley.

Por auto de 11 de marzo de 2016, el juzgado libró mandamiento de pago a favor del banco y a cargo de los demandados, según la forma y términos solicitados en la demanda, y de él ordenó su notificación y traslado; habiéndose remitido el citatorio para notificación personal y el aviso de notificación a la carrera 6 #10-123 de Chocontá, mediante providencia de 6 de noviembre de 2018 se les tuvo

por notificados de la existencia del proceso y como no formularon excepciones, se dispuso seguir adelante con la ejecución en la forma dispuesta en la orden de apremio.

El 10 de abril siguiente, pidieron los demandados declarar la nulidad de lo actuado por indebida notificación, aduciendo que los citatorios enviados no fueron recibidos por ninguno de ellos y, por el contrario, existió una presunta “*falsedad personal*” y “*fraude procesal*”, con el propósito de darle validez a las que fueron enviadas, pues en los citatorios para notificación personal se dice que fueron recibidos por José Chicuazuque y los avisos, por su parte, que no los quiso recibir, cuando lo cierto es que para esa época él no vivía en ese inmueble, sino en la carrera 22 # 161-39 de Bogotá y que ese día nadie estaba en la casa, por lo que esas afirmaciones se contradicen con la realidad de las cosas, lo que les impidió ejercer en debida forma su derecho de defensa.

Previo traslado al demandante, el que se opuso a esa petición y practicadas las pruebas decretadas, mediante el proveído apelado el juzgado denegó la nulidad, tras considerar que la notificación cumplió con las exigencias de los artículos 315 y 320 del código de procedimiento civil, pues no solo se colmaron todas las exigencias formales determinadas en la ley, sino que tanto el citatorio como el aviso fueron recibidos sin objeciones en el lugar indicado en la demanda como lugar de notificaciones de los demandados, como se comprueba con las correspondientes certificaciones de la empresa de correo Apoyo Logístico en Mensajería S.A.S., donde se informa que en esa dirección “*reside, labora o frecuente*” cada uno de los demandados.

Si bien los ejecutados aducen que su domicilio es en Bogotá y, por ende, debían ser notificados en la carrera 22 #161-39 de esa ciudad y que solo habitualmente visitan la casa de Chocontá, ello choca con la afirmación que hizo Julia Marlen el 30 de noviembre de 2017, data en que atendió la diligencia de secuestro practicada respecto del inmueble donde señaló que ella vivía ahí en el tercer piso; además, el testimonio de José Antonio Montañez Orbes,

gerente y representante legal de la empresa que entregó los citatorios, relató que la persona que lo atendió se presentó como José Neyid y los recibió, pero luego se negó a firmar el acta de recibo, por lo que puso su nombre en la guía, siguiendo las previsiones de la Resolución 5588 de la CRC, algo que no riñe con lo previsto en la ley 1369 de 2009, ni en los artículos 315 y 320 del código de procedimiento civil, pues no se requiere para ese efecto que la suscripción del recibo la haga directamente su destinatario, sino que basta con que la comunicación se haya entregado en la dirección que ha sido previamente informada por el demandante.

Es que el lugar de notificaciones no siempre coincide con el del domicilio, pues se trata de conceptos distintos, como acontece en el evento en el que quedó acreditado que los demandados también tienen como residencia el municipio de Chocontá, pues efectivamente habitan, aunque sea ocasionalmente, el inmueble que el banco tiene en garantía, cual se descubre del propio dicho de los incidentantes, al punto que cuando José Neyid fue aspirante a la Alcaldía del municipio en el año 2015 aseguró no solo residir en ese municipio, sino que además inscribió como dirección la misma a la que fueron enviados los citatorios, algo suficiente para concluir que con el trámite surtido sí se garantizó ese enteramiento.

Inconforme con esa decisión, los demandados interpusieron recurso de reposición y, subsidiariamente, de apelación; frustráneo el primero, les fue concedido el segundo en el efecto devolutivo el que, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II- El recurso de apelación

Lo despliegan sobre la idea de que el inmueble ubicado en la carrera 6 # 10 - 123 de Chocontá, solo era utilizado para vacaciones, visitas esporádicas y explotarlo económicamente, lo que en ningún momento le atribuye el ánimo de residir de manera permanente allí, como para que puedan ser notificados en ese lugar, pues de acuerdo con lo expuesto por la demandada Julia Marlen Barrantes, solo

visitaban de vez en cuando el inmueble, como lo corroboraron también los deponentes Flor Alba Sánchez y Christian Neyid Chicuazuque, pues el ‘centro de operaciones’ y vivienda de los demandados queda en Bogotá y no en ese municipio.

Prueba de la irregularidad descansa en la afirmación que hizo José Antonio Montañez, de que tras hacer una auditoría en mayo de 2019 pudo concluir que el demandado no vivía en ese lugar, de suerte que resulta inexplicable que en 2017 haya podido suscribir una certificación diciendo lo contrario y, peor aún, firmar el recibido en su nombre, a sabiendas de que en esa fecha se encontraban en una celebración familiar en el municipio de Villa de Leyva, al punto que no logró identificarlo en la audiencia en que rindió su testimonio, lo que corrobora que esos citatorios nunca fueron entregados a los demandados, ni a persona alguna que se encontrara en el bien; tan es así, que por eso no se indicó el número de cédula de quien supuestamente recibió los citatorios, con lo que se incumplió el deber de identificar a quien recibe el objeto postal, lo que impide sostener que los demandados fueron notificados en debida forma.

Consideraciones

La cuestión es que el valor intrínseco de la certificación dada por la empresa de correos sobre la entrega satisfactoria del citatorio para notificación personal y de la notificación por aviso, no puede dejarse de lado así no más, cual lo pretenden los recurrentes, pues, cual insistentemente lo ha expresado la doctrina constitucional, ese tipo de constancias que expide el servicio postal gozan de plena credibilidad, ya que es *“a través del cual se envían la citación y el aviso de notificación es autorizado por el Estado y está sometido a controles por parte del mismo, lo cual permite considerar que es serio y confiable”* (sentencia C-783 de 2004).

Lo anterior está diciendo que a los peticionarios le correspondía demostrar que en verdad los

encargados del correo nunca visitaron el inmueble, ora que no obstante que indagaron por ellos en la carrera 6ª #10-123 de Chocontá [que es la dirección indicada en la demanda y la que corresponde al inmueble objeto de garantía], no pudieron obtener jamás como respuesta, que allí sí residían o recibían comunicaciones, quehacer del que simplemente se sustrajeron; mas, por el contrario, si en las dos ocasiones los dichos funcionarios de correo que entregan esas comunicaciones y certifican que esto se dio, es porque esa es la información que debieron obtener en ese momento, no obstante que quienes los atendieron se negaron a firmar el recibido, como allí se dejó constancia, por lo que es muy difícil sostener que el trámite de notificación pudo adolecer de alguna irregularidad.

Todo lo más cuando para acreditar esa causal de ineficacia, “*no basta con que éste demuestre que para la época de la notificación residía en un lugar distinto a aquel en el cual se le notificó, sino que es necesario corroborar que el demandante conocía esa circunstancia y que actuó de mala fe o con el inicuo propósito de ocultarle el proceso iniciado en su contra, vulnerando, de esa manera, el derecho de defensa del demandado*” (Cas. Civ. Sent. de 17 de mayo de 2013, exp. 2010-01855-00 – sublíneas ajenas al texto); pese a ello, ningún elemento de juicio se aportó para demostrar que al señalar esa dirección para efectos de la notificación, el demandante actuó de forma torticera u omitió intencionalmente brindar una información diferente. Antes bien, lo que quedó al descubierto es que al decir que allí podía intentarse ese enteramiento, el banco no obró de modo inopinado o con ligereza, pues si la ejecución se promovió contra José Neyid y Julia Marlen, no precisamente por ser quienes constituyeron directamente el gravamen, sino en virtud de la facultad de persecución del bien que tiene el acreedor favorecido con esa garantía real, en los términos del artículo 2452 del código civil, existían razones de peso que le permitían concluir, razonadamente, que aquél era el lugar de notificaciones de los demandados, lo que descarta la idea de que su proceder haya tenido como propósito socavar las garantías constitucionales de aquéllos, menos cuando a pesar de la carga que tenían en hombros, lo

único que se limitaron a sostener los incidentantes fue que esa dirección corresponde a la de la vivienda que adquirieron para visitar esporádicamente, que no para radicar allí su domicilio, el que siempre ha estado en la ciudad de Bogotá, sin hacer cuenta de que no es posible confundir el *“significado del domicilio, en cuyos cimientos convergen en forma dinámica dos elementos consustanciales (la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella, tal como lo indica el artículo 76 del código civil) con la dirección de notificaciones que como requisito formal de la demanda establece el numeral 11 del artículo 75 del estatuto procesal citado, concepto de marcado talante procesal imposible de asemejar al mencionado atributo de la personalidad’* (auto de 20 de febrero de 2001, expediente 2001-003, citado en el de 14 de mayo de 2002 expediente 0074)” (Cas. Civ. Auto de 15 de septiembre de 2009, rad. 2009-01232-00).

Cierto que en las guías de envío no aparece la firma de las personas que de acuerdo con las respectivas certificaciones recibieron las comunicaciones, mas ello no es óbice para decir que ese enteramiento no se realizó, pues *“para informar la existencia de un proceso iniciado en su contra, la ley no exige la entrega personal de la comunicación sino al envío de la misma a ‘la dirección que hubiere sido informada al juez de conocimiento como lugar de habitación o de trabajo de quien debe ser notificado personalmente’*, de modo que *“en caso de que se hubiere efectuado la entrega de la comunicación a que hace referencia el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil en el domicilio reportado por el demandante como el lugar de habitación o de trabajo del demandado, a este último corresponde la carga de la prueba que desvirtúe lo contrario, esto es, que: i) no se entregó la comunicación en el lugar informado por el demandante o, ii) el domicilio reportado no correspondía al lugar de habitación o de trabajo del demandado, situaciones en las que, obviamente, el demandante debe asumir las cargas derivadas de la suspensión del proceso o de la nulidad de las diligencias adelantadas en contradicción con los derechos al debido*

proceso y de defensa del demandado” (Sentencia T- 489 de 2006).

Por el contrario, existen suficientes elementos de juicio que permiten inferir que las comunicaciones fueron debidamente entregadas y que ese enteramiento sí se llevó a cabo; así lo descubre el dicho de los propios incidentantes cuando reconocieron, quizá persuadidos equivocadamente de que la notificación del mandamiento de pago solo podía realizarse en su lugar de domicilio, que ese inmueble era visitado por ellos en fines de semana y en distintas ocasiones; así lo señaló José Neyid al sostener que compró ese inmueble con el fin de *“salir un poco del encierro de Bogotá y venir de pronto a mi pueblo y tener donde quedarme”*, para *“venir los fines de semana, cuando estábamos cansados y así”*, y lo aceptó de modo más elocuente Julia Marlen, quien al rendir interrogatorio aceptó que *“de vez en cuando habito esa casa aquí en Chocontá”*, específicamente el tercer piso, que lo tienen para utilizarlo cuando visitan el municipio.

Algo que contrasta con lo que había expresado el 30 de noviembre de 2017, al atender la diligencia de secuestro ordenada dentro del proceso, llevada a cabo por el juzgado civil municipal de la localidad, comisionado para su práctica por el a-quo, cuando, enterada del objeto de ésta sostuvo: *“yo vivo acá en el tercer piso, el primero y segundo piso están arrendados a la señora Floralba Sánchez Chávez, entrego fotocopia del contrato de arrendamiento en 4 folios, yo quiero arreglar lo de la deuda”* (folio 154 del cuaderno principal), por lo que no puede pretender ahora desentenderse de esa afirmación; al cabo de todo, esa ambivalencia riñe con los principios de lealtad y probidad que deben campea en los procesos judiciales, naturalmente que nada bien hace a la administración de justicia que una persona pueda ir ante los jueces dando versiones diferentes de los hechos, dependiendo de cuál es el que más lo beneficie en ese momento.

Conclusión acerca de que el enteramiento sobre la existencia del proceso bien podía haberse realizado en ese

inmueble que, es preciso señalarlo, se impone así los testimonios rendidos a pedido del demandante afirmen que éstos nunca tenían contacto con la casa, pues, a la verdad, escrutando la ciencia de sus dichos, resultan tan precarios y contradictorios que, por eso mismo, impide atribuirles un mérito probatorio mayor.

En efecto, nótese que Flor Alba Sánchez Chávez, de 36 años, quien dijo ser arrendataria de los dos primeros pisos del inmueble desde 2017, señaló que el tercer piso de aquél siempre ha estado desocupado, que nunca hay nadie porque los propietarios no lo visitaban, por lo menos mientras ella estaba y Christian Neyid Chicuazuque Barrantes, por su parte, hijo de la pareja indicó que ese bien lo adquirieron sus padres solo como una oportunidad de negocio y se lo arrendaron a Flor, quien vive en el tercer piso con sus hijos, mientras que sus padres “*siempre han estado en Bogotá*”, contradicción entre éstos y lo que ya habían aceptado los demandados, que desde luego les resta toda fuerza de persuasión, pues amén de que sus dichos no fueron espontáneos, lo que se advierte en sus relatos es cierto afán por favorecer los intereses de los ejecutados.

Antes bien, resulta muy extraño para el Tribunal que afirmándose por éstos que los demandados nunca han tenido su residencia, domicilio o lugar de habitación en el municipio, haya quedado al descubierto que José Neyid se inscribió como candidato a la alcaldía municipal de Chocontá por el Partido Libertal Colombiano para el período constitucional 2016-2019, cual se acredita con la respuesta que al efecto dio la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino además que la “*dirección aportada*” al “*momento de la inscripción según el formulario E-6AL*” haya sido justamente la del inmueble en el que se realizó la notificación (folio 226 del cuaderno 2), por supuesto que, en esas condiciones, la pendencia que traen los incidentantes en la impugnación luce demasiado endeble, hasta el punto que impide coincidir con aquéllos en que la actuación de la empresa de correo postal al certificar la entrega fue torticera, o pensar siquiera en que el trámite de notificación no se adelantó en los términos en que lo exige el legislador.

Todo lo más cuando escrutando rigurosamente el relato que hizo José Antonio Montañez Orbes, representante legal de la empresa de mensajería contratada para realizar la entrega y quien señaló haber entregado personalmente los citatorios de notificación personal el 30 de diciembre de 2017, no autoriza, ni de lejos, arribar al colofón que propone la apelación; por el contrario, nótese cómo lo que narró aquél fue que ese día lo *“atendió un señor al cual le pregunté por los dos destinatarios, me recibió los dos sobres y me dijo el nombre cuando le pedí el número telefónico me indicó el del aviso que estaba en la ventana, me dio el nombre, le pregunté si era José Neyid y me dijo que sí simplemente”*, que a esa información se atuvo dado que no está habilitado para exigirle a las personas que se identifiquen y que de ello dejó constancia en la guía; cierto, que aquél no pudo afirmar con contundencia si esa persona que le recibió estaba presente en la audiencia o describir sus características morfológicas, algo que justificó en el tiempo que ha transcurrido y desde luego en el volumen de entregas que manejan, pero sí sostuvo que podía ser el *“abogado que está con usted, se parece a él* [refiriéndose de ese modo al demandado que era el que en el recinto del juzgado estaba sentado al lado del abogado que estaba interrogando al testigo] o a un señor que está afuera con saco negro [quizá alguno de los tres hijos de la pareja de demandados que fueron citados para declarar y que según se aprecia en el video de la audiencia esperaban en la parte de afuera de la sala para ser llamados]”, lo que termina por corroborar que la prueba acerca de la ausencia de la visita para realizar la entrega de los citatorios quedó en espera; por lo demás, aunque señaló que requerido por el bufete de abogados que lo contrató para realizar la entrega, realizó una auditoría de las entregas y en virtud de ello visitó nuevamente el predio en mayo de 2019, donde fue atendido por la ventana del tercer piso por la demandada [persona que identificó en la audiencia], quien le indicó que José Neyid no vivía ahí, no por ello es dable concluir en que el trámite de notificación del mandamiento de pago no se realizó en debida forma; y no solo porque esa información la obtuvo mucho tiempo después de cuando esas diligencias de notificación se realizaron, sino porque si el incidente de nulidad ya estaba en curso y el fundamento de éste descansó

justamente en que los demandados no vivían en ese inmueble, era de esperarse que siguiendo esa línea argumentativa, recibiera eso como respuesta cuando indagó al respecto.

Por último, aunque los demandados sostienen que es imposible que esa entrega de los citatorios de notificación personal se haya podido realizar el 30 de diciembre de 2017, porque ese día estaban departiendo en una reunión familiar en el municipio de Villa de Leyva, como lo pretendieron acreditar con el dicho de su hijo Christian Neyid, lo cierto es que no hay nada que corrobore ese aserto pues, ya se dijo, el relato de aquél es desde todo punto de vista insuficiente en ese propósito, pues amén de no haber sido espontáneo, sino que por el contrario reflejó un interés marcado por favorecer la situación de sus progenitores, la jurisprudencia ya ha dicho cuando de testigos sospechosos se trata, que la *“mácula con que se mira a tal linaje de testigos sólo se desvanecerá, y por qué no, hasta desaparecerá, en la medida en que brinden un relato preciso, responsivo, exacto y cabal, esto es, en síntesis, razonado y particularizado en todo cuando dieren noticia, y que, aun así, encuentren respaldo en otros elementos probativos”* (Cas. Civ. Sent. de 10 de mayo de 1994, exp. 3927 reiterada en sentencia de 10 de abril de 2007, exp. 2001-00451-01 – subraya la Sala), algo que aquí, a decir verdad, no aconteció, en la medida en que ninguna prueba se ofreció en respaldo de esa afirmación.

El auto apelado, así las cosas, deberá confirmarse, con la condigna imposición en costas a cargo de los recurrentes, según la regla 1ª del precepto 365 ejusdem.

II. – Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto de fecha y procedencia preanotados.

Costas del recurso a cargo de los recurrentes.
Liquídense por la secretaría del a-quo incluyendo la suma de \$300.000 como agencias en derecho.

Oportunamente, vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

**GERMAN OCTAVIO RODRIGUEZ VELASQUEZ
MAGISTRADO TRIBUNAL O CONSEJO
SECCIONAL
TRIBUNAL SUPERIOR SALA 004 CIVIL - FAMILIA
DE CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**4526bb0d1ff2cf48cd7aa0e6558312d93d8a2295941ea2c03
2712b95003dd28e**

Documento generado en 27/10/2020 02:57:58 p.m.

**Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**